DUC IN ALTUM

UA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHILE



EL PAPEL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN CHILE 2026

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y TOMADORES DE DECISIONES

International Network for Governmental Science Advice

DUC IN ALTUM
UA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHILE

Cátedra UNESCO
Educación Científica para la Ciudadanía

unesco
Cátedra

El papel del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas en Chile 2026. Perspectiva de la comunidad científica y tomadores de decisiones

Noviembre, 2026
Santiago, Chile

© Universidad Autónoma de Chile
Vicerrectoría de Investigación y Doctorados
Avenida del Valle 534, Huechuraba
Santiago, Chile

© Cátedra UNESCO Educación Científica para la Ciudadanía
© Red Internacional para el Asesoramiento Científico Gubernamental, nodo Latino América y el Caribe (INGSA, LAC)

DOI: 10.32457/md4fze87

Contenidos
Nataly Venegas Zúñiga, Sebastián Escobar Aguirre

Textos
Alejandra Araya González, Nataly Venegas Zúñiga

Análisis de datos
Alain Chaple

Diseño y diagramación
Pedro Díaz Muñoz

Este material puede ser copiado y redistribuido por cualquier medio o formato, además se puede remezclar, transformar y crear a partir del material siempre y cuando se reconozca adecuadamente la autoría y las contribuciones se difundan bajo la misma licencia del material original.

Contenido

1. **Presentación** 5

2. **Resumen ejecutivo** 6

3. **Introducción** 9

4. **Metodología y criterios de selección** 12
   1. Diseño del estudio 12
   2. Selección de los resultados 13
   3. Análisis e interpretación de las respuestas 14

5. **Resultados** 15
   1. Perfil de los participantes 15
   2. Valoración de la utilidad de investigación para evaluar políticas públicas 16
   3. Los factores considerados al formular políticas públicas 16
   4. La consulta directa a científicos 17
   5. La distancia entre científicos y responsables de políticas públicas 18
   6. Los obstáculos que dificultan la colaboración 19
   7. La necesidad de ayuda para comunicar la evidencia científica 21
   8. Las formas de mejorar el trabajo conjunto 23

6. **Discusión** 25
   Reconocer la utilidad de la ciencia no asegura su valoración o importancia en la toma de decisiones 25
   Los dos grupos tienen experiencias y opiniones diferentes 26
   Los resultados chilenos en perspectiva comparada 26
   Facilitar el contacto y mejorar la comunicación 27
   Qué permiten concluir las encuestas 28
   ¿Cómo estos resultados se alinean con la estrategia CTCI 2026-2030? 29

7. **Conclusiones** 30

8. **Recomendaciones** 31

9. **Referencias** 33

10. **ANEXO: Cuestionario** 35

1. Presentación

El siguiente informe corresponde a la integración de las percepciones de la comunidad científica y tomadores de decisiones respecto al rol del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas en Chile. Este trabajo se hizo a partir de una alianza entre la Cátedra Unesco "Educación Científica para la Ciudadanía liderada por la Universidad Autónoma de Chile y el nodo de Latino América y el Caribe de la Red Internacional para el Asesoramiento Científico Gubernamental (INGSA, LAC por sus siglas en inglés), donde se implementó una encuesta de igual característica que en otros países de América Latina a fin de alentar la comparabilidad entre países de la región como también para establecer el nivel de evolución entre ellos.

En una primera etapa se presentaron los resultados de la perspectiva de la comunidad científica. En este documento, se presentan ambas visiones y se comparan las respuestas de ambos grupos quienes reconocen la utilidad del conocimiento científico. Sin embargo, el aporte de la ciencia convive con dificultades de acceso, comunicación y continuidad que limitan una relación sostenida entre ambas comunidades. La comparación permite analizar estas dificultades y precisar las condiciones necesarias para fortalecer la interfaz ciencia-política.

2. Resumen ejecutivo

El informe *El papel del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas en Chile 2025* identificó una distancia entre la utilidad atribuida al conocimiento científico y su incidencia percibida en la formulación de políticas públicas en Chile. La incorporación de respuestas de formuladores de políticas permite revisar ese diagnóstico desde ambas comunidades. El presente informe compara las opiniones de científicos y formuladores de políticas públicas sobre siete aspectos: 1) la utilidad de la investigación para evaluar el impacto de las políticas públicas; 2) los factores que se consideran al formularlas, incluida la evidencia científica; 3) la consulta directa a científicos; 4) la magnitud de la brecha de colaboración entre ambos grupos; 5) los obstáculos que dificultan esa colaboración; 6) la necesidad de intermediarios que ayuden a comunicar la evidencia científica y 7) los mecanismos que podrían mejorar el trabajo conjunto.

La valoración positiva de la ciencia coexiste con condiciones insuficientes para una colaboración sostenida. Los resultados apoyan esta hipótesis y al final del documento se incluyen algunas recomendaciones para fortalecer la colaboración entre la comunidad científica y tomadores de decisiones.

El 80,6% de la comunidad científica y el 69,5% de los formuladores de políticas consideran que la investigación es útil para evaluar el impacto de las políticas públicas. Sin embargo, cuando se les pregunta qué factores se consideran al formular nuevas políticas, el 26,5% de los científicos y el 45,8% de los formuladores mencionan la evidencia científica. Aunque las preguntas abordan aspectos distintos, los resultados sugieren que valorar la investigación no significa considerar que se utiliza habitualmente para formular políticas. Al preguntar directamente si la evidencia se usa ampliamente en el país para formular políticas, está de acuerdo el 16,5% de la comunidad científica y el 40,5% de los formuladores.

Los formuladores perciben una mayor consulta directa a científicos que la señalada por la propia comunidad científica: el 25,6% de los primeros afirma que esta consulta ocurre, frente al 3,1% de los segundos. Por otra parte, cerca del 40% de ambos grupos responde que ocurre «a veces». Estos resultados muestran que existen coincidencias, pero que ambos grupos tienen opiniones diferentes sobre su frecuencia.

La mayoría de ambos grupos considera que existe una gran brecha de colaboración entre científicos y responsables de políticas públicas: el 93,3% de los científicos y el 67,1% de los formuladores que respondieron esta pregunta (otro 29,3% de los formuladores la considera pequeña y el 3,7% afirma que no existe). Sin embargo, destacan otros obstáculos. Los científicos señalan principalmente que la mayor brecha se debe a la falta de una tradición de trabajo conjunto y de canales de comunicación formales. Los formuladores, por su lado, mencionan en primer lugar las diferencias de lenguaje y de tiempos de respuesta, que ambos grupos señalan con frecuencia similar. Para mejorar la colaboración, sería necesario facilitar el contacto entre ambos grupos, comunicar los resultados de manera comprensible y responder dentro de los plazos que requieren las decisiones públicas.

El 77,0% de los científicos y el 91,6% de los formuladores consideran necesario contar con intermediarios que ayuden a explicar la evidencia científica a quienes toman decisiones. El acuerdo se refiere a la necesidad, no a quién debería ejercer la función: las oficinas de enlace de las universidades son mencionadas por el 79,8% de los científicos y el 35,4% de los formuladores, y en la pregunta 5 del cuestionario los formuladores mencionan más que los científicos a las ONG (37,8% frente a 12,2%) y las academias nacionales de ciencias (23,2% frente a 4,1%). Sin embargo, no coinciden plenamente en las formas de mejorar el trabajo conjunto. Los científicos mencionan con mayor frecuencia los paneles de diálogo, los encuentros participativos y la participación formal de asesores científicos. Los informes breves para orientar decisiones de política pública —conocidos como *briefings*— reciben una proporción similar de menciones, cercana al 39% en ambos grupos. Por ello, convendría acordar este instrumento como un mecanismo de acercamiento entre las partes.

Los formuladores, además, están más de acuerdo que los científicos con que la evidencia disponible no es práctica para implementarla en las políticas (39,7% frente a 13,5%) y menos con que el método científico sea la única forma segura

de determinar soluciones (37,3% frente a 61,1%). Estos resultados matizan la lectura de que la falta de pertinencia de la investigación es un obstáculo menor (13,5% y 24,4% en la figura 5): la diferencia aparece cuando se pregunta por su aplicabilidad práctica.

El análisis recomienda que comunidad científica e instituciones públicas cuenten con personas o equipos a quienes contactar, dispongan de informes breves y puedan reunirse para discutir preguntas concretas. También propone reconocer el trabajo de quienes facilitan estos intercambios y registrar las consultas realizadas y el uso de sus respuestas. Para evaluar los avances, es necesario distinguir entre recibir información científica, consultar a especialistas y utilizar sus aportes en una decisión. Estas recomendaciones se apoyan en los resultados de las encuestas a científicos y formuladores de políticas públicas, así como en la bibliografía consultada. Se agregan recomendaciones sobre la elección y evaluación piloto de los intermediarios, la orientación de los productos hacia la aplicabilidad práctica, la incorporación de personas con formación avanzada en organismos públicos, las mejoras para futuras mediciones y la articulación con la Estrategia Nacional de CTCI 2026.

3. Introducción

El uso del conocimiento científico en la creación, diseño e implementación de las políticas públicas (considerando idea de ley y trámite legislativo) requiere que investigadores y responsables de tomar decisiones puedan trabajar juntos. Esta colaboración permite identificar qué información se necesita, revisar las investigaciones disponibles, consultar a especialistas y discutir posibles soluciones. La investigación puede ayudar a comprender un problema, diseñar una política, ponerla en práctica y evaluar sus resultados. Sus aportes se consideran junto con las prioridades políticas, los recursos disponibles y las necesidades de la población.

La relación entre ciencia y política pública, también llamada interfaz ciencia-política, requiere más que comunicar resultados de investigación: supone comprender las necesidades de las instituciones públicas, generar conocimiento pertinente y facilitar su utilización en los procesos de decisión. En Chile y América Latina, estas interfaces suelen desarrollarse mediante iniciativas temporales y redes informales, con dificultades asociadas a la fragmentación institucional, la falta de mecanismos de intermediación y la discontinuidad de los procesos (Amigo-Jorquera et al., 2026). Asimismo, el uso de evidencia científica depende de factores institucionales y políticos, además de su calidad y disponibilidad (Suazo-Galdames et al., 2025). En este contexto, los intermediarios cumplen un papel fundamental al traducir los resultados de investigación, explicitar sus alcances y limitaciones y facilitar el diálogo entre investigadores y actores públicos. Su función es ampliar y clarificar las alternativas disponibles para orientar las decisiones, sin sustituir la responsabilidad de quienes deben adoptarlas (Pielke, 2007; Gluckman, Bardsley y Kaiser, 2021).

El informe *El papel del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas en Chile*, publicado en mayo de 2025 por la Cátedra Unesco "Educación Científica para la Ciudadanía" e INGSA LAC, abordó esta relación desde la perspectiva de la comunidad científica. Sus resultados mostraron que los investigadores reconocían la utilidad de la ciencia, pero percibían dificultades para colaborar con los responsables de las políticas públicas. El informe también señaló la necesidad de conocer la opinión de estos últimos (Escobar Aguirre et al., 2025, pp. 6 y 28-30). La segunda encuesta permite comparar ambas perspectivas e identificar acuerdos y diferencias sobre el uso de la investigación y las formas de trabajar juntos.

La hipótesis de este informe es que ambos grupos reconocen la utilidad de la ciencia, pero enfrentan dificultades para establecer contactos, comunicarse y mantener la colaboración en el tiempo. Desde la perspectiva del *honest broker* propuesta por Pielke (2007), la articulación entre ciencia y política requiere facilitar el diálogo entre investigadores y actores públicos, clarificando las alternativas disponibles y sus implicancias, sin sustituir la responsabilidad de quienes toman las decisiones. Esta noción describe un rol del investigador que amplía las opciones de decisión y debe distinguirse de la intermediación institucional descrita por Gluckman et al. (2021), que se refiere a personas, equipos u organizaciones que facilitan el vínculo entre ambas comunidades y que es la función por la que se consultó en las encuestas. Además, preguntar si un intermediario debe «traducir» la evidencia supone una transferencia en una sola dirección; mientras que autores recomiendan complementarla con enfoques de coproducción e interacción continua (Suazo-Galdames et al., 2025). Los resultados entre ambas encuestas permiten examinar esta hipótesis y reconocer las distintas experiencias de los participantes. Las diferencias entre sus respuestas pueden reflejar distintas formas de conocer o participar en las consultas científicas, sin que necesariamente signifique que estas no ocurren.

El objetivo general es comparar las opiniones de científicos y formuladores de políticas públicas en Chile sobre la utilidad de la investigación, su uso en las decisiones y las condiciones para colaborar. En particular, se busca conocer cuánto valoran la investigación y cuánto consideran que se utiliza; examinar si se consulta directamente a científicos y qué distancia perciben entre ambos grupos; identificar los obstáculos que dificultan el trabajo conjunto; y proponer formas de mejorar la colaboración.

Para desarrollar este análisis se seleccionaron siete gráficos que permiten contrastar la hipótesis, considerando tanto los resultados que la apoyan como aquellos que la matizan. Estos abordan la utilidad de la investigación para evaluar políticas, los factores considerados al formularlas, la consulta directa a científicos, la brecha de colaboración, los obstáculos, la necesidad de intermediarios y los mecanismos para mejorar el trabajo conjunto.

La bibliografía consultada ayuda a explicar estos resultados y fundamentar las recomendaciones. En particular, respalda la importancia de que las instituciones públicas puedan identificar sus necesidades de información, acceder a investigaciones pertinentes y contar con equipos capaces de evaluarlas y utilizarlas (OECD, 2020). El análisis se centra en las respuestas de científicos y formuladores de políticas públicas que participaron en las dos encuestas. Además de OECD (2020), se incorporan la revisión sistemática de Suazo-Galdames et al. (2025), los resultados de la encuesta comparable aplicada en Colombia (INGSA LAC y ACCEFYN, 2022) y la Estrategia Nacional de CTCI 2026, que permiten contextualizar las diferencias entre grupos.

4. Metodología y criterios de selección

1. Diseño del estudio

El estudio se desarrolló en dos etapas. La primera consistió en una encuesta de 24 preguntas dirigida a la comunidad científica, respondida por 98 personas. Las respuestas se recogieron entre junio y noviembre de 2024 mediante la plataforma SurveyMonkey. Inicialmente, se contactó a investigadores de universidades públicas y privadas con publicaciones en Web of Science. Posteriormente, se invitó a otros investigadores recomendados por los participantes, mediante un procedimiento conocido como muestreo de bola de nieve (Escobar Aguirre et al., 2025, pp. 7-8). Los resultados de esta etapa se publicaron en el primer informe 2025.

La segunda etapa contempló la recopilación de las respuestas de tomadores de decisiones (personas con experiencia en formulación, implementación y participación en políticas públicas) a través de 22 de las 24 preguntas que fueron dirigidas a la comunidad científica. Para esto se usaron estrategias complementarias:

A) El año 2025 y con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), se solicitó información a distintos organismos estatales con el propósito de identificar y contactar a profesionales con grado académico de magíster o doctorado en ciencias que desempeñaran funciones vinculadas a la toma de decisiones. A partir de esta gestión, se obtuvo información de 24 profesionales (n = 24), quienes previamente habían otorgado su consentimiento para ser contactados con fines de participación en el estudio. Las personas identificadas pertenecían a distintas instituciones de la Administración del Estado, entre ellas ministerios, subsecretarías, superintendencias y otros organismos públicos, tales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Superintendencia de Casinos de Juego, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Fondo Nacional

de Salud (FONASA), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), entre otras. Esta diversidad institucional permitió acceder a profesionales vinculados a diferentes ámbitos de la gestión pública. Posteriormente, se contactó a los profesionales identificados y se les envió el enlace de acceso a la encuesta, invitándoles a responder el instrumento de manera voluntaria. Este procedimiento constituyó una vía complementaria de difusión de la encuesta, orientada a facilitar la participación de personas con formación académica avanzada en ciencias y responsabilidades en la toma de decisiones dentro del sector público.

B) Se contactó a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, alcaldes, concejales, jefaturas de gabinete y responsables de áreas y proyectos, considerando tanto a quienes ejercían estos cargos al momento del estudio como a quienes los habían desempeñado durante los gobiernos pasados: Sebastián Piñera (2018-2022), Gabriel Boric (2022-2026) y José Antonio Kast (2026-actualidad). La selección de participantes buscó incorporar distintas experiencias y perspectivas sobre la relación entre el conocimiento científico y la toma de decisiones públicas.

En total, en esta segunda etapa, respondieron entre 82 y 84 personas (con perfil de tomadores de decisiones) por pregunta. Las respuestas fueron recopiladas entre el 6 de octubre de 2024 y el 3 de agosto de 2026.

Ambas encuestas abordaron temas comunes, lo que permite comparar las opiniones de los dos grupos sobre el uso del conocimiento científico y las condiciones para colaborar.

2. Selección de los resultados

Para este informe se seleccionaron siete preguntas y sus resultados tales como: la utilidad de la investigación para evaluar el impacto de las políticas; los factores considerados al formularlas, incluida la evidencia científica; la consulta directa a la comunidad científica; la magnitud de la brecha de colaboración; los obstáculos que dificultan el trabajo conjunto; la necesidad de intermediarios que ayuden a comunicar la evidencia; y los mecanismos que podrían mejorar la colaboración.

La selección permite examinar la hipótesis del informe sin repetir información. Se consideraron tanto los resultados que apoyan la existencia de dificultades

de colaboración como aquellos que muestran una situación más favorable, especialmente desde la perspectiva de los formuladores.

Criterio de selección: se priorizaron las preguntas que tenían un par comparable en ambos cuestionarios. Las comparaciones no incluidas inicialmente se incorporan en el texto por su relevancia para las recomendaciones, entre ellas la valoración de la evidencia como poco práctica, las organizaciones que podrían intermediar y las diferencias por área de política.

3. Análisis e interpretación de las respuestas

Los resultados se presentan como porcentajes para facilitar la comparación entre ambos grupos. El número de personas que respondió puede variar entre preguntas, ya que algunos participantes dejaron respuestas en blanco. En las preguntas que permiten seleccionar varias alternativas, una persona puede mencionar más de una opción. En esos casos, la suma de los porcentajes puede superar el 100%. En las preguntas que solicitan expresar un grado de acuerdo, se agrupan las dos respuestas favorables cuando interesa mostrar el acuerdo total con una afirmación.

Las diferencias entre porcentajes se expresan en puntos porcentuales. Por ejemplo, si una alternativa es mencionada por el 40% de un grupo y el 60% del otro, la diferencia es de 20 puntos porcentuales.

Las diferencias entre grupos se contrastaron con la prueba exacta de Fisher (preguntas de opción múltiple), la prueba U de Mann-Whitney (preguntas con escala) y la prueba de chi-cuadrado (preguntas con categorías excluyentes), con ajuste de los valores p por comparaciones múltiples. Las diferencias marcadas con asterisco en las figuras son significativas con valor p ajustado inferior a 0,05.

Las encuestas recogen opiniones y experiencias de los participantes. Sus respuestas permiten conocer cómo perciben la relación entre ciencia y política pública, pero no comprobar directamente cuánto se utiliza la investigación en las decisiones. Del mismo modo, señalar un obstáculo no demuestra que este sea la causa de un menor uso de evidencia, y preferir un mecanismo de colaboración no garantiza que sea eficaz.

Los porcentajes de este informe se calculan sobre quienes respondieron cada pregunta (científicos: 89 a 98; formuladores: 82 a 84), por lo que pueden diferir de los publicados en el primer informe.

5. Resultados

1. Perfil de los participantes

Se recibieron 84 respuestas de formuladores de políticas públicas; 81 de ellos completaron las preguntas de caracterización, por lo que los porcentajes se calculan sobre esa base. Todas las personas residen en Chile. La mayoría tiene entre 35 y 54 años (67,9%), cuenta con estudios de postgrado (64,2%) y trabaja o trabajó en el gobierno nacional (46,9%) o local (21,0%). Las áreas más frecuentes son salud (13,6%) y ciencias sociales (11,1%) (Figura 1).

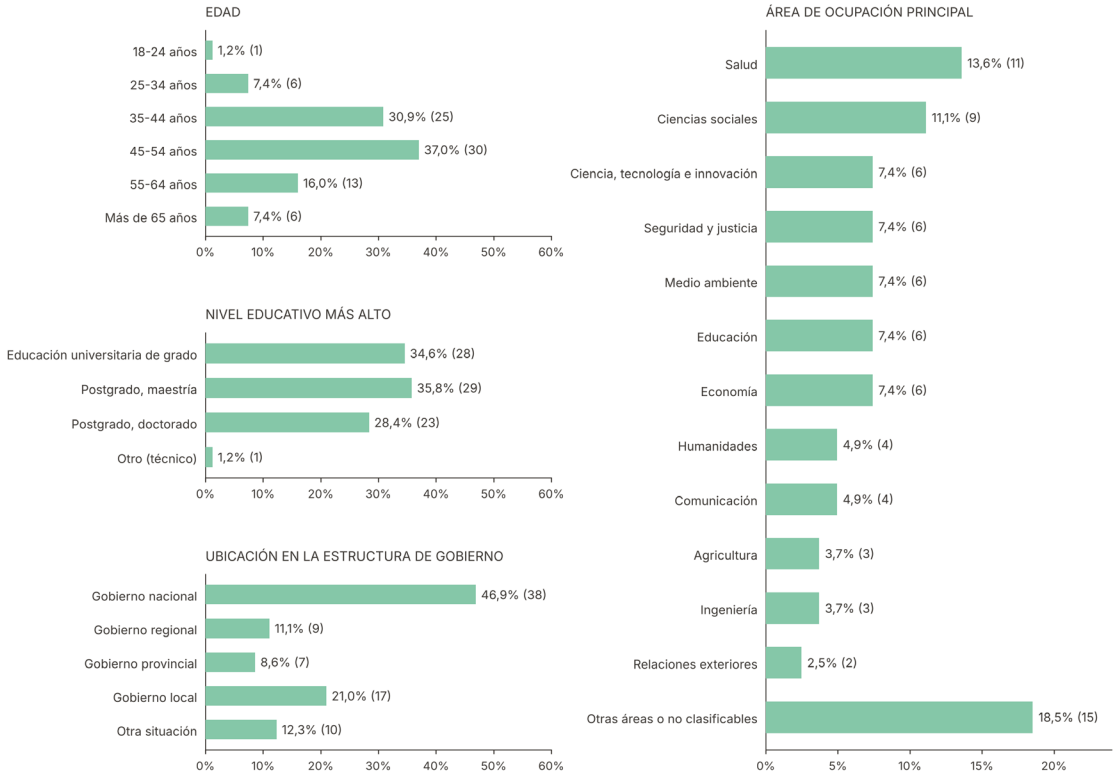

Figura 1. Perfil de los formuladores de políticas públicas participantes. Los porcentajes se calcularon sobre las 81 personas que respondieron las preguntas de caracterización (de 84 respuestas totales); entre paréntesis se indica el número de personas. En nivel educativo se consideró el nivel más alto marcado. En ubicación en la estructura de gobierno, «Otra situación» agrupa respuestas abiertas (poder legislativo, exfuncionarios de gobierno y otras). En área de ocupación, las respuestas abiertas de «Otro» fueron recodificadas por el equipo, y «Otras áreas o no clasificables» agrupa cultura, defensa, cambio climático, finanzas, ciencias exactas, energía, bienestar e inclusión social y respuestas multisectoriales, legislativas o no clasificables.

2. Valoración de la utilidad de investigación para evaluar políticas públicas

El 80,6% de los científicos y el 69,5% de los formuladores consideran que la investigación es útil para evaluar el impacto de las políticas públicas. Estos porcentajes suman las dos respuestas de acuerdo. El 63,3% de los científicos y el 41,5% de los formuladores están totalmente de acuerdo; otro 17,3% y 28,0%, respectivamente, están de acuerdo. La mayoría de ambos grupos reconoce, por tanto, que la investigación puede ayudar a evaluar los resultados de las políticas. Este acuerdo ofrece una base para el trabajo conjunto.

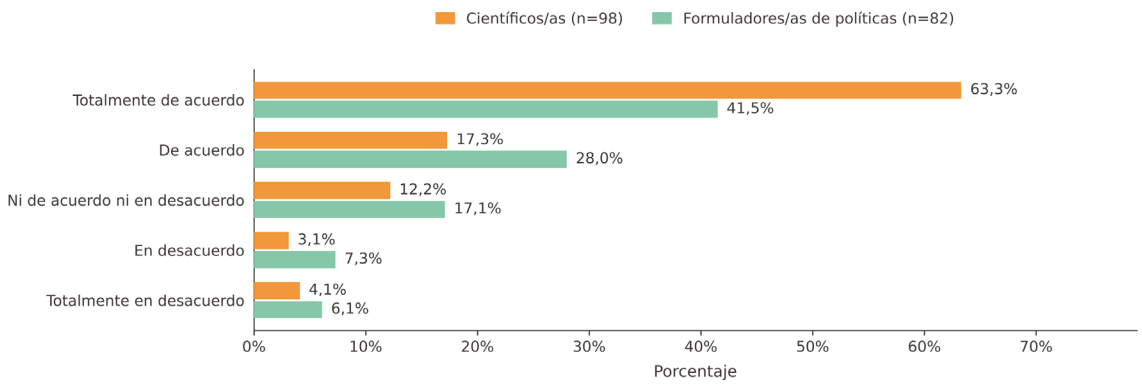

Figura 2. Opiniones sobre la utilidad de la investigación para evaluar el impacto de las políticas públicas. Respuestas a la pregunta ¿Cree usted que los resultados de las investigaciones sobre temas económicos, de salud, sociales y ambientales, son útiles para la evaluación del impacto de las políticas públicas? IC 95% Wilson por grupo. * = p ajustada (Holm) < 0,05.
Escala: 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

3. Los factores considerados al formular políticas públicas

Cuando se pregunta qué factores se consideran al formular nuevas políticas, el 84,7% de los científicos y el 63,9% de los formuladores mencionan las consideraciones políticas. Los impactos económicos son señalados por el 78,6% y el 61,4%, respectivamente. La evidencia científica es mencionada por el 26,5% de los científicos y el 45,8% de los formuladores: una diferencia de 19,3 puntos porcentuales.

En comparación con la figura anterior, estos resultados sugieren que reconocer la utilidad de la investigación no significa considerar que se usa habitualmente para formular políticas. Esta comparación debe leerse con cautela: la pregunta de la figura 1 usa una escala de acuerdo y la de la figura 2 es de opción múltiple, por lo que no mencionar la evidencia no equivale a no considerarla. La comparación más directa es la de la figura 6 (la evidencia «se usa ampliamente»). Los formuladores mencionan con mayor frecuencia la evidencia científica que los investigadores. Como cada persona podía elegir varias alternativas, los resultados no demuestran que las consideraciones políticas o económicas impidan utilizar la ciencia: distintos factores pueden intervenir en una misma decisión.

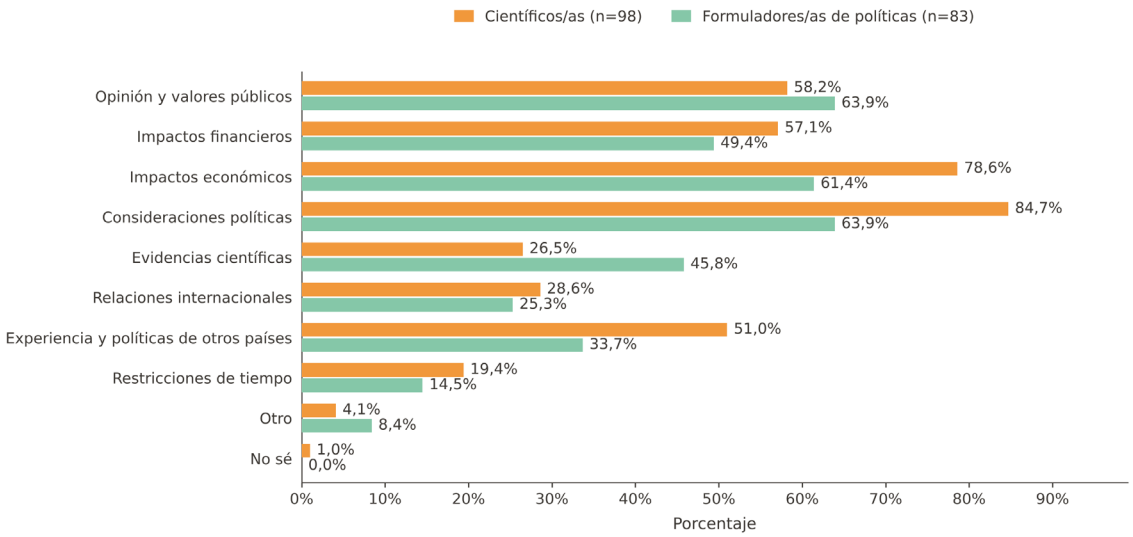

Figura 3. Factores que, según los participantes, se consideran al formular nuevas políticas públicas. Respuestas a la pregunta Según su experiencia, ¿qué factores se tienen en cuenta en su país para desarrollar nuevas políticas? Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor. IC 95% Wilson por grupo. * = p ajustada (Holm) < 0,05.

4. La consulta directa a científicos

El 3,1% de los científicos y el 25,6% de los formuladores responde que los responsables de las políticas públicas consultan directamente a científicos. En cambio, el 57,1% de los primeros y el 34,1% de los segundos responde que no. La opción «a veces» reúne porcentajes similares: 39,8% entre científicos y 40,2% entre

formuladores. La distribución de respuestas difiere de manera estadísticamente significativa entre ambos grupos.

Los dos grupos tienen, por tanto, opiniones diferentes sobre la consulta directa. Los formuladores consideran con mayor frecuencia que esta ocurre, mientras que entre los científicos predomina la respuesta negativa. La consulta ocasional también tiene una presencia importante en ambos grupos. Estas diferencias podrían relacionarse con los contactos o las experiencias que conoce cada participante, pero la encuesta no permite comprobarlo. También puede deberse al tipo de pregunta: los formuladores informan sobre su propia práctica (con posible sesgo de deseabilidad social) y los científicos, sobre la de otros, de la que tienen menor visibilidad. En Colombia, con el mismo cuestionario, la respuesta «sí» fue de alrededor de 3% entre científicos y 4% entre formuladores (INGSA LAC y ACCEFYN, 2022); la cifra chilena de formuladores (25,6%) es por tanto particularmente alta y podría reflejar la composición de la muestra, que incluyó autoridades electas. Además, consultar a un científico no significa necesariamente que sus recomendaciones se utilicen en la decisión final.

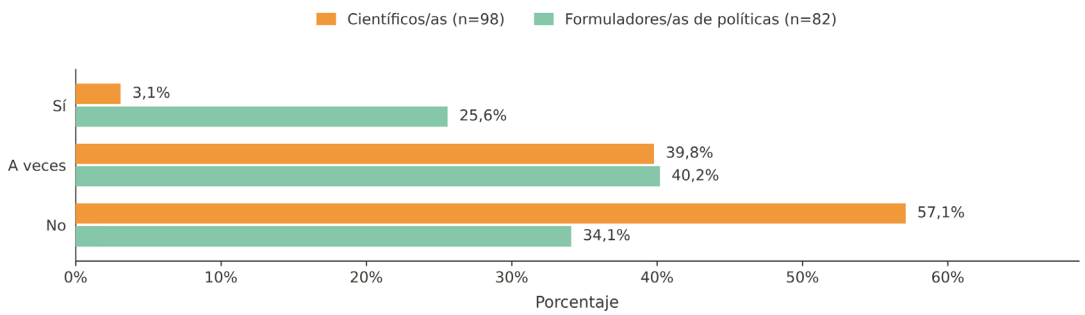

Figura 4. Opiniones sobre si los responsables de formular políticas consultan directamente a científicos. *Respuestas a la pregunta* ¿Considera usted que los(as) responsables de formular políticas públicas consultan directamente a los(as) científicos(as) en la toma de decisiones? IC 95% Wilson por grupo. * = p ajustada (Holm) < 0,05.

5. La distancia entre científicos y responsables de políticas públicas

El 93,3% de los científicos y el 67,1% de los formuladores que respondieron esta pregunta considera que existe una gran brecha de colaboración entre ambos

grupos. Una brecha pequeña es señalada por el 6,7% y el 29,3%, respectivamente. La diferencia entre quienes consideran grande la brecha es de 26,2 puntos porcentuales. El 3,7% de los formuladores (3 personas) señala que no hay brecha. La distribución difiere de manera estadísticamente significativa entre grupos.

La mayoría de ambos grupos considera que hay una distancia importante en la colaboración, aunque esta opinión es más frecuente entre los científicos. El resultado debe leerse junto con las respuestas sobre consulta directa: pueden existir contactos y, al mismo tiempo, dificultades para trabajar juntos. Para comprender mejor estas dificultades habría que examinar cómo se establecen los contactos, con qué frecuencia se mantienen y qué ocurre después de una consulta. En Colombia, con el mismo cuestionario, la brecha grande fue señalada por el 95% de los científicos y el 82% de los formuladores (INGSA LAC y ACCEFYN, 2022): el patrón es similar, con valores más altos en ambos grupos.

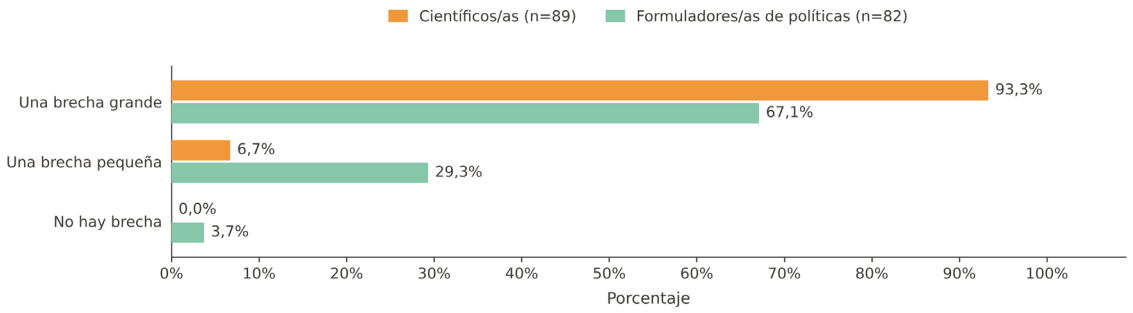

Figura 5. Opiniones sobre la magnitud de la brecha de colaboración entre ambos grupos. Respuestas a la pregunta ¿Cree usted que existe una brecha real de colaboración entre la comunidad científica y los formuladores de políticas? IC 95% Wilson por grupo. * = p ajustada (Holm) < 0,05.

6. Los obstáculos que dificultan la colaboración

Entre los científicos, los obstáculos más mencionados son la falta de una tradición de trabajo conjunto, con 82,0%; la falta de canales de comunicación, con 67,4%; y el desconocimiento entre ambas comunidades, con 57,3%. Entre los formuladores destacan las diferencias de lenguaje, con 48,8%; los distintos tiempos de respuesta, con 46,3%; y la falta de una tradición de colaboración, con 40,2%.

Ambos grupos atribuyen una importancia similar a las diferencias de lenguaje y de tiempos de respuesta. Entre científicos, estas dificultades son mencionadas por el 43,8% y el 42,7%, respectivamente. En cambio, la falta de canales y de una tradición de trabajo conjunto preocupa mucho más a la comunidad científica que a los formuladores. La idea de que la investigación no aborda los problemas que interesan a las políticas públicas recibe menos menciones: 13,5% entre científicos y 24,4% entre formuladores. Los resultados sugieren que, para mejorar la colaboración, es necesario facilitar el contacto, explicar la investigación de manera comprensible y responder dentro de los plazos que requieren las decisiones. En consecuencia, el lenguaje y los tiempos de respuesta aparecen como obstáculos compartidos por ambos grupos, más que como un rasgo distintivo de los formuladores.

La baja mención de que la investigación no aborda los problemas de la política contrasta con la figura 6, donde el 39,7% de los formuladores (frente al 13,5% de los científicos) está de acuerdo con que la evidencia disponible no es práctica para implementarla. Ambas respuestas no son contradictorias, pero sugieren que la pertinencia temática y la aplicabilidad práctica son cuestiones distintas, y que esta última debe explorarse con los formuladores.

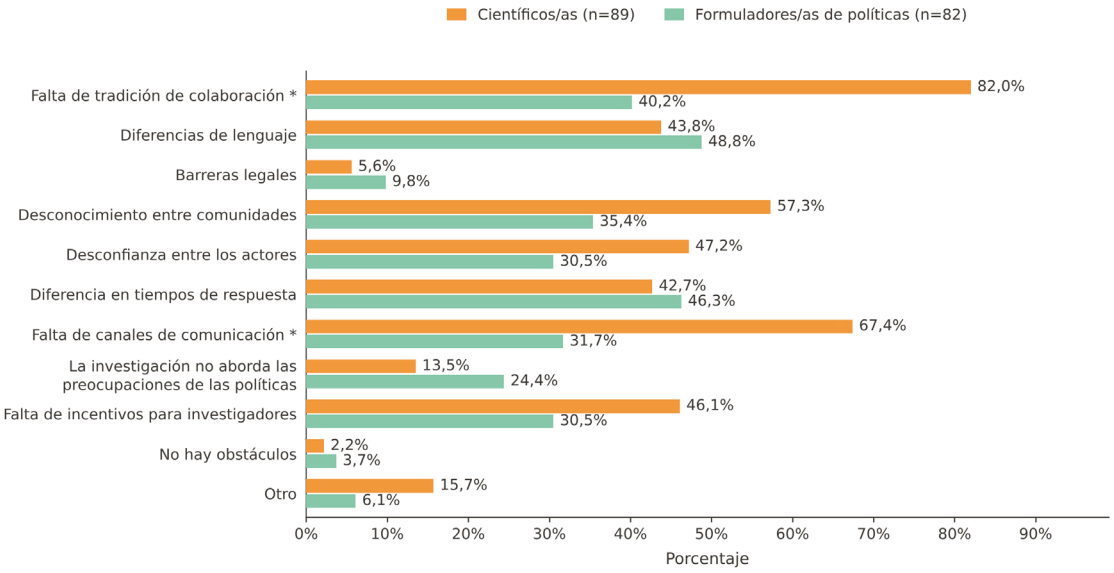

Figura 6. Principales obstáculos para que los responsables de políticas públicas consulten a científicos. Respuestas a la pregunta ¿Cuáles son los principales obstáculos para que los(as) responsables de formular políticas públicas consulten a los(as) científicos(as)? Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor. IC 95% Wilson por grupo. * = p ajustada (Holm) < 0,05.

7. La necesidad de ayuda para comunicar la evidencia científica

El 76,9% de los científicos y el 91,6% de los formuladores consideran necesario contar con intermediarios que ayuden a explicar la evidencia científica a quienes toman decisiones. Estos porcentajes suman las dos respuestas de acuerdo. En cambio, solo el 16,5% de los científicos y el 40,5% de los formuladores están de acuerdo con que la evidencia se utiliza ampliamente para formular políticas. El desacuerdo con esta última afirmación alcanza 52,8% y 31,0%, respectivamente. Ambas diferencias son significativas, igual que la referida a la necesidad de intermediarios.

Por otra parte, el 76,7% de los científicos y el 59,0% de los formuladores están de acuerdo con que la evidencia científica proporciona soluciones a los problemas del país. Los resultados vuelven a mostrar una diferencia entre lo que se considera que la ciencia puede aportar y cuánto se cree que se utiliza. Los formuladores perciben un mayor uso de evidencia que los científicos y, al mismo tiempo, expresan una mayor necesidad de ayuda para comunicarla. Se detectaron diferencias significativas en las respuestas referidas a la practicidad de la evidencia (el 39,8% de los formuladores y el 13,5% de los científicos considera que no es práctica para implementarla), al uso exclusivo de métodos científicos (el 61,1% de los científicos y el 37,3% de los formuladores lo considera la única forma segura de determinar soluciones) y a la búsqueda de asesoramiento (el 11,2% de los científicos y el 38,6% de los formuladores considera que los formuladores consultan a científicos).

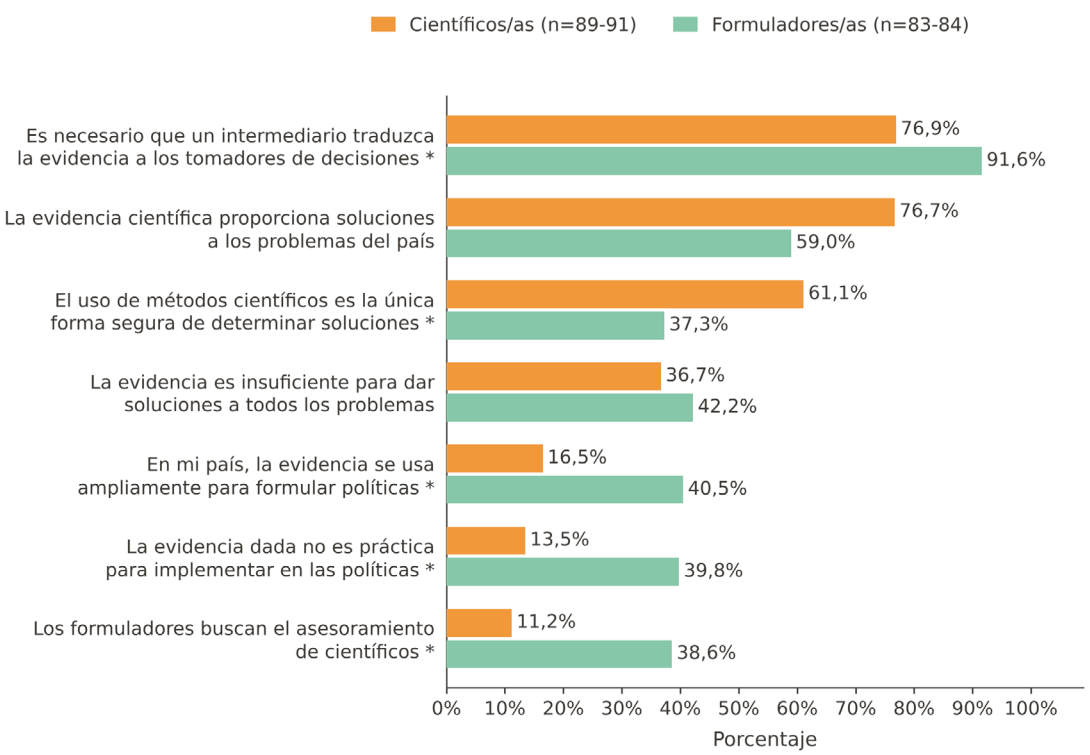

Figura 7. Opiniones sobre el uso de evidencia científica y la necesidad de intermediarios. Respuestas a la pregunta ¿Cuáles son los mecanismos más apropiados para una transferencia eficiente de conocimiento de los(as) investigadores(as) a los(as) responsables de formular políticas públicas? Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor. IC 95% Wilson por grupo. * = p ajustada (Holm) < 0,05.
Escala: 1 significa fuertemente de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4, en desacuerdo; y 5, fuertemente en desacuerdo.

El amplio acuerdo sobre la necesidad de intermediarios señala una posibilidad de mejora compartida. Estas personas o equipos pueden ayudar a precisar qué información se necesita, explicar los resultados de la investigación y aclarar sus límites. Las respuestas sobre quién podría cumplir esa tarea muestran valoraciones distintas: las oficinas de enlace de universidades e instituciones científicas son mencionadas por el 79,8% de los científicos y el 35,4% de los formuladores; las comisiones científicas, por el 75,3% y el 36,6%; y las organizaciones de transferencia de tecnología, por el 37,1% y el 11,0% (datos no mostrados). Por tanto, el acuerdo sobre la necesidad de intermediarios no se extiende a quién debería ejercer la función.

8. Las formas de mejorar el trabajo conjunto

Los científicos mencionan con mayor frecuencia los paneles de diálogo y los encuentros participativos, ambos con 75,3%; los seminarios con pocos participantes, con 68,5%; y la participación formal de asesores científicos, con 65,2%. Entre los formuladores, estas opciones reciben 37,8%, 36,6%, 34,1% y 39,0% de las menciones, respectivamente. Los informes breves para orientar decisiones de política pública, conocidos como *briefings*, reciben porcentajes similares: 39,3% entre científicos y 39,0% entre formuladores. Son significativas las diferencias en paneles de diálogo, seminarios y encuentros participativos; no lo son las referidas a asesores formales (26 puntos porcentuales; valor p ajustado cercano a 0,06) ni a informes breves.

Aunque ambos grupos consideran necesaria la ayuda de intermediarios, no coinciden plenamente en las formas de mejorar la colaboración. Los científicos mencionan más las reuniones y los espacios de encuentro. Los informes breves ofrecen una opción valorada de manera similar por los dos grupos, aunque no son mencionados por la mayoría. Por ello, convendría acordar con las instituciones públicas qué actividades y qué tipos de información les resultarían útiles. Estas preferencias orientan propuestas, pero no demuestran que un mecanismo funcione mejor que otro. Ningún mecanismo es mencionado por la mayoría de los formuladores; los informes breves y los asesores formales (39,0% cada uno) son los más señalados por ellos. En Colombia, con el mismo cuestionario, los formuladores respaldaron con mayor frecuencia los paneles (71%) y los encuentros participativos (78%) (INGSA LAC y ACCEFYN, 2022), lo que sugiere que la menor adhesión de los formuladores chilenos podría deberse a la composición de la muestra más que a una falta de interés en estos formatos.

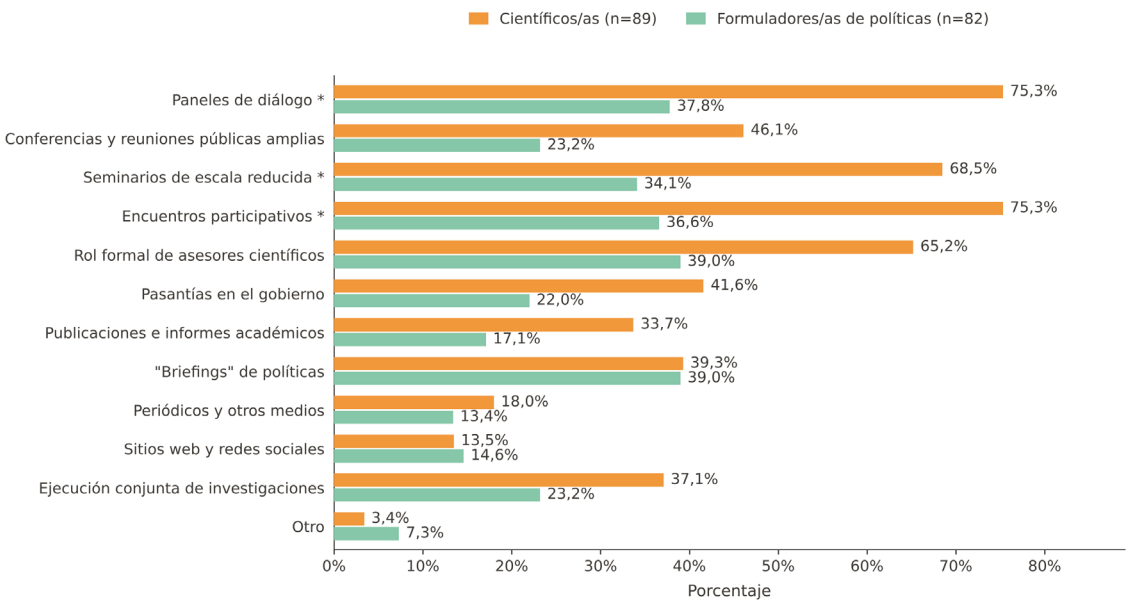

Figura 8. Mecanismos que los participantes consideran apropiados para acercar la investigación a las políticas públicas. Respuestas a la pregunta ¿Cuáles son los mecanismos más apropiados para una transferencia eficiente de conocimiento de los(as) investigadores(as) a los(as) responsables de formular políticas públicas? Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor. IC 95% Wilson por grupo. * = p ajustada (Holm) < 0,05.

6. Discusión

Reconocer la utilidad de la ciencia no asegura su valoración o importancia en la toma de decisiones

Los resultados apoyan la idea central de que ambos grupos valoran la investigación y el conocimiento, pero perciben dificultades para trabajar juntos de forma sostenida. La mayoría reconoce su utilidad para evaluar el impacto de las políticas públicas. Sin embargo, menos participantes la mencionan entre los factores considerados al formularlas, y los científicos son especialmente críticos respecto de su uso y de la consulta a especialistas. Esto permite describir una distancia entre valoración y uso, pero no demuestra que los obstáculos señalados sean la causa de esa distancia.

Estas respuestas no son contradictorias. Considerar útil la investigación expresa lo que se cree que puede aportar; opinar sobre su uso expresa lo que se cree que ocurre. Para acercar ambos aspectos, es necesario conocer las preguntas de las instituciones públicas, encontrar investigaciones que ayuden a responderlas y facilitar su discusión antes de tomar una decisión.

Además de disponer de investigaciones, las instituciones públicas necesitan equipos capaces de buscar información, evaluar su calidad y utilizarla. Aumentar la cantidad de resultados disponibles puede ser insuficiente si quienes deben decidir no tienen tiempo, recursos o apoyo para revisarlos (OECD, 2020). Esta necesidad ayuda a comprender los problemas de comunicación y de plazos señalados por los participantes.

La revisión sistemática de Suazo-Galdames et al. (2025) identifica como barreras recurrentes la fragmentación de los sistemas de asesoría, la limitada infraestructura de datos y la débil comunicación entre investigadores y formuladores, y como facilitadores los organismos de asesoría científica, los mecanismos de intermediación y la coproducción de conocimiento. Estos hallazgos coinciden con los obstáculos señalados por los participantes, con una diferencia relevante: la revisión advierte contra los modelos lineales de transferencia, mientras que la

pregunta sobre intermediarios supone que alguien debe «traducir» la evidencia. Que el 43,3% de los formuladores esté en desacuerdo con que el método científico sea la única forma segura de determinar soluciones (frente al 16,6% de los científicos) apunta en la misma dirección: los formuladores esperan que la evidencia dialogue con valores, experiencias y restricciones del contexto.

Los dos grupos tienen experiencias y opiniones diferentes

Las respuestas de los formuladores permiten precisar las conclusiones del primer informe. Este grupo percibe más uso de evidencia, mayor consulta directa y una menor distancia de colaboración que la comunidad científica. Por ello, los resultados no indican que falten contactos en todos los casos, sino que ambos grupos conocen o valoran de manera diferente las relaciones existentes.

Una posible explicación es que los formuladores conozcan consultas a ciertos especialistas, mientras otros investigadores no participen en ellas o no sepan cómo se utilizan sus aportes. También pueden existir expectativas distintas sobre la frecuencia y la profundidad que debería tener una consulta. Las encuestas no permiten confirmar estas explicaciones, pero muestran por qué es importante considerar las respuestas de ambas comunidades.

La valoración de la ciencia y las dificultades para colaborar también aparecen en otros estudios de la región. Este antecedente respalda la importancia de distinguir entre reconocer la utilidad de la investigación, acceder a ella y utilizarla en decisiones. No significa que las experiencias de distintos países sean iguales (INGSA LAC y ACCEFYN, 2022, pp. 53-57).

Los resultados chilenos en perspectiva comparada

La comparación con Colombia, donde se aplicó el mismo cuestionario, permite situar los resultados chilenos. En ambos países la mayoría considera grande la brecha (93,3% de los científicos y 67,1% de los formuladores en Chile; 95% y 82% en Colombia) y la respuesta afirmativa sobre consulta directa es baja entre los científicos (3,1% en Chile; alrededor de 3% en Colombia). Las diferencias se

concentran en los formuladores: en Chile, el 25,6% declara que se consulta directamente a científicos (alrededor de 4% en Colombia), el 45,8% menciona la evidencia entre los factores considerados (30% en Colombia) y el respaldo a las oficinas de enlace y a los encuentros participativos es menor (35,4% y 36,6%, frente a 73% y 78%) (INGSA LAC y ACCEFYN, 2022). Estas diferencias pueden reflejar contextos institucionales distintos, pero también la composición de las muestras, un aspecto que debe aclararse antes de publicar.

También es necesario conocer qué ocurre después de una consulta. Recibir asesoramiento no garantiza que se sigan sus recomendaciones. A su vez, una institución puede utilizar investigaciones sin contactar a sus autores. Registrar los aportes al diagnóstico de un problema, al diseño de una medida o a su evaluación ayudaría a comprender mejor cómo contribuye la ciencia a las políticas públicas.

Facilitar el contacto y mejorar la comunicación

Los obstáculos señalados requieren respuestas complementarias. Los científicos destacan la falta de contactos y de una tradición de trabajo conjunto; los formuladores, las diferencias de lenguaje y de tiempos. Facilitar reuniones puede ser poco útil si la información llega tarde o resulta difícil de comprender. Del mismo modo, preparar buenos informes no asegura que lleguen a las personas que los necesitan.

Los intermediarios pueden ayudar a resolver estas dificultades. Su tarea consiste en acercar a los participantes, precisar las preguntas que deben responderse y comunicar qué se sabe y qué sigue siendo incierto. Estas funciones ayudan a entender por qué una consulta aislada puede no ser suficiente para mantener una buena colaboración (Gluckman et al., 2021).

Para mantener este trabajo en el tiempo se necesitan personas preparadas, recursos y responsabilidades claras. La formación de investigadores debe acompañarse de oportunidades para que sus conocimientos se utilicen también fuera de las universidades. Ese informe documenta que solo alrededor del 6% de las personas con doctorado trabaja en organismos públicos y que un piloto de inserción de doctores en el sector público fue objetado por la Dirección de Presupuestos en 2023 (Lecourt Miranda, 2025). Ello sugiere que el reconocimiento de las tareas de

enlace y asesoramiento requiere también cargos y financiamiento estables dentro de las instituciones públicas y científicas.

Las diferencias sobre los mecanismos de colaboración también deben considerarse. Que muchos científicos prefieran paneles o encuentros no asegura que estas actividades respondan a las preguntas y los plazos de las instituciones públicas. En este sentido, la experiencia de formación de capacidades para el intercambio de conocimiento con el Congreso Nacional, presentada por Reyes-Mendy et al. (2026), constituye un referente para diseñar iniciativas formativas replicables que fortalezcan las capacidades de los investigadores para vincularse con actores públicos y contribuir a las políticas públicas. Los informes breves podrían servir como punto de partida, acompañados de reuniones cuando sean necesarias. Su utilidad debería evaluarse por la pertinencia de la información que aportan y el uso que se hace de ella, y no solo por el número de asistentes (Reyes-Mendy et al., 2026). A nivel nacional, el análisis de doce años de participación de productores de conocimiento en comisiones legislativas ambientales muestra una participación limitada y sesgos de género y de localización geográfica (Reyes-Mendy y Gelcich, 2023), lo que respalda la necesidad de ampliar y diversificar quiénes aportan evidencia al Congreso. Plataformas como Vincula, que reúne a investigadores de universidades dispuestos a responder consultas de autoridades públicas (Vincula, s. f.), constituyen un antecedente para pilotos de intermediación.

Qué permiten concluir las encuestas

Las respuestas permiten identificar problemas que merecen atención y proponer formas de abordarlos. Sin embargo, no muestran directamente cómo se toman las decisiones ni qué efectos tiene el asesoramiento. Por ejemplo, no prueban que la falta de canales de comunicación explique por sí sola un menor uso de evidencia, ni que incorporar intermediarios reduzca necesariamente la distancia entre ambos grupos. Para esto, se necesitan estudios adicionales.

La hipótesis encuentra apoyo en la utilidad que ambos grupos atribuyen a la ciencia, la distancia que perciben y los obstáculos que señalan. Al mismo tiempo, las respuestas más favorables de los formuladores muestran que ya existen experiencias de consulta y utilización de evidencia. Las propuestas deberían reconocer esas experiencias y examinar qué necesitan para funcionar mejor.

Mejorar esta relación requiere mantener el intercambio y adaptar las soluciones a cada institución. La bibliografía respalda la importancia de las relaciones continuas y de las distintas formas de organizar el asesoramiento (OECD y Comisión Europea, 2025). Antes de extender una iniciativa, conviene probarla y evaluar si ayuda a responder las necesidades de quienes participan.

¿Cómo estos resultados se alinean con la estrategia CTCI 2026-2030?

La Estrategia Nacional de CTCI 2026 incorpora, entre sus ejes, la asesoría basada en evidencia científica y conocimiento situado para informar decisiones públicas, con una iniciativa de asesoría científica institucionalizada para la toma de decisiones públicas (punto 2.1 del documento) y otra de infraestructura nacional de datos y evidencia para políticas públicas (punto 2.2 del documento). También propone fortalecer a los actores de la interfaz ciencia-política mediante equipos especializados de traducción, facilitación y co-diseño, y nuevos perfiles profesionales (Consejo CTCI, 2026).

Los resultados aportan cuatro insumos para su implementación:

1. Primero, la necesidad de intermediarios es compartida (76,9% de los científicos y 91,6% de los formuladores), pero no hay acuerdo sobre quién debe ejercer la función; por ello se sugiere diseñarla de manera mixta y probarla en pilotos evaluados antes de institucionalizarla.
2. Segundo, la asesoría científica institucionalizada debería incorporar desde su diseño a los formuladores, cuyas valoraciones sobre formatos y actores intermediarios difieren de las de la comunidad científica.
3. Tercero, la infraestructura de datos y evidencia debería abordar la aplicabilidad práctica de la evidencia, que es el punto donde más divergen ambas comunidades.
4. Por último, la baja inserción de personas con doctorado en el sector público (Lecourt Miranda, 2025) limita la capacidad de las instituciones para actuar como contraparte técnica de esa asesoría.

7. Conclusiones

Los resultados muestran que científicos y formuladores de políticas públicas reconocen la utilidad de la investigación, especialmente para evaluar el impacto de las políticas. Sin embargo, esta valoración no se acompaña de una percepción igualmente favorable sobre su uso en las decisiones. La evidencia científica recibe menos menciones que las consideraciones políticas y económicas entre los factores que se toman en cuenta al formular políticas. Por ello, las dificultades de colaboración no pueden explicarse únicamente por una falta de valoración de la ciencia: también es necesario considerar las condiciones que permiten utilizarla.

La comparación entre ambos grupos permite precisar el diagnóstico del primer informe. Los formuladores perciben más consulta directa a la comunidad científica, mayor uso de evidencia y una menor brecha de colaboración que los mismos científicos. Estas diferencias son estadísticamente significativas en la consulta directa, el uso amplio de la evidencia y la magnitud de la brecha. Esto sugiere que la relación no se experimenta de la misma manera desde ambas comunidades. Aunque existen contactos, estos pueden ser ocasionales, concentrarse en determinados especialistas o no ser conocidos por otros investigadores, lo que muestra la importancia de considerar ambas perspectivas al proponer y diseñar mejoras.

Los obstáculos señalados también difieren. Los científicos destacan la falta de una tradición de trabajo conjunto y de canales de comunicación, mientras los formuladores sitúan en primer lugar las diferencias de lenguaje y de tiempos de respuesta, que ambos grupos mencionan con frecuencia similar. Mejorar la colaboración requiere, por tanto, facilitar el contacto y procurar que la información sea comprensible y llegue cuando pueda utilizarse. El amplio acuerdo sobre la necesidad de intermediarios ofrece una base para avanzar, aunque las preferencias por reuniones, asesores e informes breves deben discutirse entre quienes participarían en estas iniciativas.

En conjunto, los resultados apoyan la hipótesis de que el reconocimiento de la utilidad de la ciencia convive con dificultades para mantener una colaboración sostenida. Las propuestas que surjan de este diagnóstico deberán acompañarse de seguimiento y evaluación para conocer su utilidad y determinar qué ajustes necesitan.

8. Recomendaciones

Se recomienda que las universidades y las instituciones públicas identifiquen personas o equipos responsables de recibir y canalizar consultas científicas. Contar con interlocutores conocidos permitiría facilitar el contacto y reducir la dependencia de relaciones personales. Para cada consulta convendría acordar qué pregunta se busca responder, qué información se necesita y en qué plazo debe entregarse. También sería útil mantener espacios periódicos de intercambio que permitan conocer las necesidades de las instituciones y las investigaciones que podrían contribuir a abordarlas. La designación debería considerar que científicos y formuladores valoran de manera distinta a los posibles intermediarios (las oficinas de enlace universitarias reciben el 79,8% y el 35,4% de las menciones, respectivamente). Se sugiere, por tanto, un esquema mixto que incluya universidades, academias nacionales y organizaciones de la sociedad civil, acordado con los propios formuladores y validado mediante pilotos evaluados.

La comunicación de resultados debería combinar informes breves con reuniones destinadas a discutir preguntas concretas. Los documentos tendrían que explicar de manera comprensible qué se sabe sobre un problema, qué dudas persisten y qué alternativas pueden considerarse. Su preparación debería acordarse con quienes utilizarán la información, para asegurar que respondan a sus preguntas y plazos. Las reuniones podrían complementar estos informes cuando sea necesario aclarar resultados, discutir sus límites o examinar sus posibles aplicaciones.

También se recomienda preparar a investigadores y equipos públicos para trabajar juntos. Los primeros pueden fortalecer sus habilidades para sintetizar y comunicar resultados a públicos no especializados; los segundos, sus herramientas para buscar, evaluar y utilizar investigaciones. Existen iniciativas internacionales que ofrecen referentes para este propósito, como la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (INGSA), que promueve el desarrollo de capacidades en la interfaz ciencia-política, y los programas de becas en política científica y tecnológica de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), que acercan a investigadores a los procesos de elaboración de políticas públicas (INGSA, s. f.; AAAS, s. f.). INGSA, fundada en 2014, reúne a más de 6.000 miembros en más de 100 países y cuenta con un capítulo para América Latina y el Caribe;

los AAAS Science & Technology Policy Fellowships operan desde 1973 y ubican a científicos, mayoritariamente con doctorado, en el Congreso y en organismos del Ejecutivo estadounidense. Se trata de referentes que deberían adaptarse y evaluarse en el contexto chileno. Esta preparación debe acompañarse de tiempo, recursos y responsabilidades institucionales que permitan aplicar lo aprendido (OECD, 2020). Asimismo, convendría reconocer el trabajo de quienes coordinan consultas, elaboran informes y mantienen los vínculos entre ambas comunidades.

Finalmente, se propone registrar las consultas realizadas y explicar cómo se utilizaron sus respuestas. Esto permitiría conocer si la investigación ayudó a comprender un problema, diseñar una medida, orientar su implementación o evaluar sus resultados, incluso cuando no se adoptaran todas las recomendaciones recibidas. Las nuevas iniciativas deberían comenzar con experiencias acotadas y evaluarse antes de ampliarse. Su valoración tendría que considerar la claridad y oportunidad de las respuestas, su utilidad para las instituciones y la continuidad del trabajo conjunto, además del número de reuniones o informes producidos.

Se recomienda orientar los informes y las reuniones hacia la aplicabilidad práctica de la evidencia. Antes de producir un documento, convendría acordar con la institución qué decisión debe informar y qué restricciones de implementación existen (presupuestarias, legales o de plazos). El 39,7% de los formuladores considera que la evidencia disponible no es práctica para implementarla, frente al 13,5% de los científicos.

Se sugiere incorporar a personas con formación avanzada en las instituciones públicas, mediante cargos estables y financiamiento, y habilitar pasantías y estancias en el gobierno y el Congreso. Pueden servir de referencia los AAAS Science & Technology Policy Fellowships y la plataforma Vincula (Lecourt Miranda, 2025; Vincula, s. f.).

Finalmente, se recomienda articular estas propuestas con las iniciativas de asesoría científica institucionalizada y de infraestructura de datos y evidencia de la Estrategia Nacional de CTCI 2026, de modo que los pilotos propuestos sirvan de insumo para su implementación.

9. Referencias

American Association for the Advancement of Science (AAAS) (s. f.). Science & Technology Policy Fellowships. https://www.aaas.org/programs/science-technology-policy-fellowships/overview

Amigo-Jorquera et al. (2026), An overview on the study of science-policy interfaces in Latin America and the Caribbean. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2026.104473

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (Consejo CTCI). Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Chile 2026. Santiago de Chile; 2026.

Escobar Aguirre, S., Abeledo, C., Ibáñez, R., Acevedo Caradeux, D., González Ibarra, P., Venegas Zúñiga, N. y Pérez Barahona, G. (2025). El papel del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas en Chile. INGSA LAC y Cátedra Unesco Educación Científica para la Ciudadanía. https://doi.org/10.32457/2728/10118202591

Gluckman, P. D., Bardsley, A. y Kaiser, M. (2021). Brokerage at the science-policy interface: from conceptual framework to practical guidance. Humanities and Social Sciences Communications, 8, artículo 84. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00756-3

International Network for Governmental Science Advice (INGSA) (s. f.). About INGSA. https://ingsa.org/about/

International Network for Governmental Science Advice, Capítulo América Latina y el Caribe (INGSA LAC), y Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) (2022). El papel del conocimiento científico en la formulación de políticas en Colombia: la perspectiva de científicos, investigadores y tomadores de decisión en Colombia. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta: identificación del estado del asesoramiento científico gubernamental en Colombia.

Lecourt Miranda, F. (2025). Identificación de brechas y propuestas de mejora para las Políticas de Capacidades Humanas. Insumo para el análisis en el marco de la actualización de la Estrategia Nacional de CTCI para el Desarrollo 2026. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Santiago, Chile.

OECD (2020). Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making: Lessons from Country Experiences. OECD Public Governance Reviews. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/86331250-en

OECD y Comisión Europea (2025). Strengthening National Evidence-Informed Policymaking Ecosystems: Lessons from Seven European Countries. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/855c5286-en

Pielke, R. A. (2007). The honest broker: Making sense of science in policy and politics. Cambridge University Press.

Reyes-Mendy, F. et al. (2026). Formación de capacidades para el intercambio de conocimiento con el Congreso Nacional: una innovación pedagógica para fortalecer el compromiso y aporte académico a las políticas públicas. https://doi.org/10.31619/caledu.n65.1729

Reyes-Mendy, F. y Gelcich, S. (2023). Legislative science advice in Chile: exploring twelve years of knowledge producers participation in environmental committee discussions. The Journal of Legislative Studies. https://doi.org/10.1080/13572334.2023.2298123

Suazo-Galdames, Saracostti y Chaple-Gil (2025), Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305

Vincula (s. f.). Plataforma de encuentro entre universidades y el Congreso Nacional de Chile. https://vincula.cl

10. ANEXO: Cuestionario

Encuesta dirigida a formuladores de políticas públicas: El papel del conocimiento científico en la formulación de políticas: la perspectiva de los formuladores de políticas [Chile 2024-2025].

Sección A: Visión sobre el estado actual de la evidencia para la formulación de políticas

A1. Según su experiencia, ¿qué factores se tienen en cuenta en su país para desarrollar nuevas políticas? ***Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor.***

___ Opinión y valores públicos

___ Impactos financieros

___ Impactos económicos

___ Consideraciones políticas

___ Evidencias científicas

___ Relaciones internacionales

___ Experiencia y políticas de otros países

___ Restricciones de tiempo

___ No sé

___ Otros (por favor, especifique) _____

_____

_____

A2. **¿Cree usted que los resultados de las investigaciones sobre temas económicos, de salud, sociales y ambientales, son útiles para la evaluación del impacto de las políticas públicas?** *Califique su respuesta en una escala de 1 a 5 (donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo)*

N	X
1	
2	
3	
4	
5	

A3. **En su opinión, ¿mediante qué medios o actores se informan los formuladores de políticas públicas sobre las evidencias científicas en su país?** *Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor.*

___ Científicos(as)

___ Publicaciones académicas

___ Intermediarios

___ "Think-tanks"

___ Organizaciones "lobistas"

___ Publicaciones periodísticas

___ Universidades

___ Ninguna de las anteriores

___ Otros (por favor, especifique) _____

_____

_____

A4. **En su país, ¿qué organismos actúan habitualmente como intermediarios entre los investigadores y los responsables de formular políticas?** ***Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor.***

___ Comisiones científicas

___ Sociedades profesionales

___ Organizaciones de transferencia de conocimientos

___ Universidades

___ ONGs de la sociedad civil

___ Academias nacionales de ciencias

___ Fundaciones

___ Think-tanks

___ Medios periodísticos

___ Asesores científicos del presidente o de organismos del poder ejecutivo

___ Ninguna de las anteriores

___ Otros (por favor, especifique) _____

_____

_____

A5. **Clasifique por orden de importancia e influencia los grupos que ha identificado como intermediarios en la formulación de políticas sobre evidencias científicas. (Siendo 1 el más importante).**

Comisiones científicas	
Sociedades profesionales	
Organizaciones de transferencia de conocimientos	
ONGs de la sociedad civil	
Academias nacionales de ciencias	
Fundaciones	
Think-tanks	
Medios periodísticos	
Asesor científico principal o asesores científicos de ministerios	
Ninguna de las anteriores	
Otros (por favor, especifique)	

A6. **Clasifique por orden de importancia e influencia los grupos que ha identificado que informan a los responsables de la formulación de políticas sobre evidencias científicas. (Siendo 1 el más importante).**

Comisiones científicas	
Sociedades profesionales	
Organizaciones de transferencia de conocimientos	
ONGs de la sociedad civil	
Academias nacionales de ciencias	
Fundaciones	
Think-tanks	
Medios periodísticos	
Asesor científico principal o asesores científicos de ministerios	
Ninguno de estos	
Otros (por favor, especifique)	

A7. ¿Considera usted que los(as) responsables de formular políticas públicas consultan directamente a los(as) científicos(as) en la toma de decisiones?

___ Sí

___ No

___ A veces

A8. ¿Tiene usted experiencia directa en la búsqueda de asesoramiento científico?

___ Sí

___ No

Sección B: Comprensión del uso y la importancia de la evidencia para la formulación de políticas

B1. Indique en qué medida considera que se utilizan la evidencia científica, la información y el conocimiento para la formulación de políticas en su país, en los siguientes ámbitos:

1. Siempre	2. Usualmente	3. A veces	4. Raramente	5. Nunca

Temas	1	2	3	4	5
Salud					
Educación					
Medio ambiente					
Bienestar e inclusión social					
Innovación y tecnología					
Economía					
Relaciones exteriores y política internacional					
Seguridad ciudadana					

Temas	1	2	3	4	5
Energía					
Cambio climático					
Agricultura y agroindustria					

B2. ¿Cómo se utiliza la evidencia científica en su país? *Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:*

1. Fuertemente de acuerdo	2. De acuerdo	3. Ni de acuerdo ni desacuerdo	4. Desacuerdo	5. Fuertemente en desacuerdo

Afirmaciones	1	2	3	4	5
En mi país, la evidencia científica de la investigación se usa ampliamente para formular políticas.					
La evidencia científica dada no es práctica para implementar en las políticas.					
La evidencia científica proporciona soluciones a los problemas que enfrenta el país.					
La evidencia científica es insuficiente para proporcionar soluciones en todos los problemas.					
Es necesario que un intermediario traduzca la evidencia científica a los políticos y tomadores de decisiones.					
El uso de métodos científicos es la única forma segura de determinar soluciones para cada problema.					
Los formuladores de políticas y los políticos buscan el asesoramiento de científicos para resolver problemas.					

Sección C: El asesoramiento científico a los gobiernos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia universal que afectó a todos los países desde principios del año 2019, demandó una estrecha relación de asesoramiento de la comunidad científica para que los gobiernos pudiesen adoptar las medidas necesarias.

La relación entre la comunidad científica, los gobiernos y las organizaciones internacionales pueden haber dejado lecciones que podrían extenderse a las relaciones futuras entre científicos(as) y los(as) responsables de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno.

C1. ¿Considera usted que, a raíz de la pandemia de COVID-19, quienes toman las decisiones han formulado y ejecutado políticas informadas en evidencias científicas? ***Por favor, marque las siguientes opciones según considere en una escala de 1 a 5.***

1. Fuertemente de acuerdo	2. De acuerdo	3. Ni de acuerdo ni desacuerdo	4. Desacuerdo	5. Fuertemente en desacuerdo

Afirmaciones	1	2	3	4	5
Los gobiernos buscaron información científica.					
Los gobiernos consultaron a los(as) científicos(as) del país.					
La participación de científicos(as) fue multidisciplinaria.					
Las políticas del gobierno de su país tomaron en cuenta las experiencias internacionales recientes.					

Sección D: Brechas entre la comunidad científica y los(as) responsables de formulación de políticas públicas

D1. ¿Cree usted que existe una brecha real de colaboración entre la comunidad científica y los formuladores de políticas?

___ Una brecha grande

___ Una brecha pequeña

___ No hay brecha

D2. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que los(as) responsables de formular políticas públicas consulten a los(as) científicos(as)? ***Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor.***

___ Falta de una tradición de colaboración

___ Diferencias de lenguaje

___ Barreras legales

___ Desconocimiento entre estas dos comunidades muy diferentes

___ Desconfianza entre los actores

___ Diferencia en los tiempos de respuesta: la escala de tiempo de los responsables políticos es más rápida que la de la comunidad científica

___ Falta de canales de comunicación

___ La investigación no aborda las preocupaciones de las políticas públicas

___ Falta de incentivos para los investigadores que están concentrados principalmente en publicar.

___ No hay obstáculos

___ Otros (por favor, especifique) _____

_____

_____

D3. **¿Cuáles son los mecanismos más apropiados para una transferencia eficiente de conocimiento de los(as) investigadores(as) a los(as) responsables de formular políticas públicas?** ***Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor.***

___ Paneles de diálogo que ofrezcan un contexto para compartir ideas entre la comunidad científica y responsables de la formulación de políticas.

___ Conferencias y otras reuniones públicas amplias

___ Seminarios de escala reducida entre investigadores y formuladores de política

___ Encuentros participativos (consultas) entre investigadores(as), responsables de políticas, profesionales y representantes de la sociedad civil

___ Utilización del papel formal de asesores científicos

___ Pasantías para que los(as) científicos(as) se compenetren en las actividades de gobierno

___ Publicaciones e informes académicos o profesionales

___ "Briefings" de políticas

___ Periódicos y otros medios de comunicación

___ Sitios web y redes sociales

___ Ejecución conjunta de investigaciones

___ Ninguna de las anteriores

___ Otros (por favor, especifique) _____

_____

_____

D4. **¿Qué organismos podrían establecer vínculos entre la comunidad científica y los(as) responsables de formular políticas públicas en su país?** ***Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor.***

___ Comisiones científicas

___ Sociedades profesionales

___ Organizaciones de transferencia de tecnología

___ ONG de la sociedad civil

___ Academias nacionales de ciencias

___ Oficinas de enlace entre universidades o instituciones científicas y organismos de gobierno

___ Fundaciones

___ "Think-tanks"

___ Medios periodísticos

___ Asesores científicos del presidente y/o de los ministerios

___ Ninguna de las anteriores

___ Otros (por favor, especifique) _____

_____

_____

D5. ¿Qué estrategias podrían considerar los(as) investigadores(as) para fomentar el uso de sus resultados en la formulación de políticas públicas? ***Marque todas las alternativas que considere pertinentes, por favor.***

___ Identificación de grupos clave de formuladores de políticas.

___ Identificación de canales de comunicación (incluyendo actividades, eventos)

___ Identificación de las prioridades sectoriales y políticas públicas en las áreas relacionadas con sus temas de trabajo

___ Vinculación de los(as) investigadores(as) con los sectores responsables de políticas públicas

___ Ninguna de las anteriores

___ Otros (por favor, especifique) _____

_____

_____

D6. ¿Cómo se puede asistir a los(as) investigadores(as) a comunicar y difundir los resultados de su investigación?

Sección E: Caracterización de quienes responden

E1. Edad

___ 18-24 años

___ 25-34 años

___ 35-44 años

___ 45-54 años

___ 55-64 años

___ Más de 65 años

E2. Máximo nivel educativo

___ Educación universitaria de grado

___ Postgrado, maestría

___ Postgrado, doctorado

___ Otros (por favor, especifique) _____

E3. Por favor, indique su país de residencia.

E4. ¿Cuál es su ubicación en la estructura de gobierno?

___ Gobierno nacional

___ Gobierno regional

___ Gobierno provincial

___ Gobierno local

___ Otra (especifique, por favor) _____

_____

E5. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor el área en la que su ocupación principal?

___ Agricultura

___ Cambio climático

___ Educación

___ Ingeniería

___ Ciencias exactas

___ Ciencias sociales

___ Humanidades

___ Defensa

___ Economía

___ Finanzas

___ Cultura

___ Comunicación

___ Transporte

___ Medio ambiente

___ Desarrollo forestal

___ Salud

___ Otros (por favor, especifique)



International Network
for Governmental
Science Advice



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHILE

Cátedra UNESCO
Educación Científica
para la Ciudadanía



unesco
Cátedra